

Izquierda y movimiento popular: viejas y nuevas tensiones de la política popular chilena

Mario Garcés

ECO, Educación y Comunicaciones

MOVIMIENTOS SOCIALES Y TRANSICIÓN

En los años ochenta, cuando el debate sobre movimientos sociales comprometía a los intelectuales chilenos y latinoamericanos, las posiciones se polarizaban entre aquellos que veían la emergencia de nuevos sujetos como expresión de una "emergencia histórica" (la de las dictaduras que cubrían el continente) y entre quienes veían que "algo nuevo" emergía desde la sociedad civil.

Entre estos últimos el tema no provocaba fácilmente consensos, por cuanto había quienes, entusiasmados por el nuevo dinamismo social que estos sujetos expresaban, dirían que se estaban configurando "nuevos sujetos históricos" (el rol que con anterioridad se le había asignado a la clase obrera, era ahora reasignado a los nuevos movimientos sociales). Otros, con mayor cautela y no con menor entusiasmo, afirmarían que estos nuevos sujetos estaban dando cuenta de "procesos de renovación de la política". Finalmente, según otros autores, había que situar la reflexión en una esfera distinta: era necesario romper el politicismo dominante en las Ciencias Sociales y dejar de ver los movimientos sólo en relación al sistema político y

la organización de las relaciones de poder institucional en la sociedad. Había que situar el tema de los movimientos en las capacidades desplegadas desde la sociedad civil "para construir sociedad". En este último sentido, los movimientos estarían dando cuenta de una diversidad de proyectos e identidades sociales que producían cambios en la sociabilidad popular.

Lamentablemente, en el caso chileno, particularmente en el ámbito intelectual y político partidario, esta última orientación no encontró toda la atención que requería, y al declinar el movimiento de protestas, en la segunda mitad de los ochenta, la reflexión se orientó más bien hacia las capacidades históricas del Estado en la "construcción de sociedad". Quien con mayor claridad expresó esta última tesis fue —como ha ocurrido en otras ocasiones— Eugenio Tironi, quien afirmaba en la segunda mitad de los ochenta que, dados los "efectos de disolución social provocados por el régimen autoritario", no había más alternativa que mirar al Estado y jugar desde él las iniciativas más consistentes de reorganización de la sociedad.

La tesis de Tironi, compartida con variados matices por otros intelectuales chilenos, pareciera haberse adecuado más a la realidad política recién

te, es decir, a las características que asumió el proceso de transición a la democracia: de protagonismo partidario en el ámbito político institucional y de debilitamiento de los movimientos sociales en la base de la sociedad.

En el ámbito político partidario de la izquierda, sin embargo, antes de que se consolidara la "salida institucional" a la dictadura, otros insistieron porfiadamente en la "salida insurreccional", que si bien encontró cierto apoyo social en el período de protestas, se debilitó crecientemente en la segunda mitad de los ochenta. Con todo, mirando ya con alguna distancia, se puede comprobar que ambas orientaciones políticas finalmente se fueron distanciando —en distintos momentos, ciertamente— de las mayorías populares y de los movimientos sociales de base popular.

De este modo, en la transición a la democracia se ha venido produciendo un evidente proceso de despoliticización de la sociedad, caracterizado por la ausencia de proyectos colectivos capaces de convocar a las mayorías populares (la política, como hace muchas décadas atrás, le dice muy poco a la gente sobre su vida cotidiana).

En este nuevo contexto, somos testigos de una práctica política dominante que podríamos denominar "de élite" (aquella que debate en los medios de comunicación) y una política de tipo "testimonial y de contestación" fuertemente debilitada en su capacidad de convocatoria, que se expresa principalmente en la denominada izquierda extra-parlamentaria (en estos días, en la candidatura del padre Pizarro). En el medio se encuentra la mayoría de la población, que ya no se interesa por la política.

La debilidad de la izquierda chilena, manifiesta en el proceso de transición, me parece que está íntimamente vinculada a algunos de los problemas antes indicados, y muy particularmente en relación a su distancia con los movimientos sociales de base y a su incapacidad para expresar proyectos colectivos.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA IZQUIERDA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

Sin lugar a dudas que para un pueblo reconocidamente politizado, como ocurre con el chileno en el contexto latinoamericano, los problemas relativos a su relación con la política y los partidos no son nuevos y se pueden rastrear a través de la historia del movimiento popular. Al menos tres tipos de problemas merecerían un debate más amplio entre nosotros. En primer lugar, el reconocimiento de que la relación entre organizaciones sociales y partidos se ha vivido como una permanente fuente de tensiones respecto de la autonomía de las organizaciones sociales, dando lugar a diversos modos históricos de superación. En segundo lugar, que respecto de la política de la izquierda hacia los movimientos sociales, recurrentemente se ha colocado el problema de la eficacia de la acción política institucional o "intrasistema". Finalmente, un tercer campo de tensiones tiene que ver con la relación entre la acción de agitación y movilización social popular y la elaboración de propuestas políticas.

Organizaciones sociales y partidos

Ya en 1867 cuando el movimiento social de los artesanos ampliaba su campo de acción y se multiplicaban las iniciativas de socorro mutuo para abordar problemas sociales relevantes en el ámbito de la salud, la educación y la seguridad social, don Lucrecio Arellano, dirigente de la Sociedad de Artesanos de Talca, opinaba de este modo en relación a la acción política militante:

¿Debe el artesano ocuparse de la política? He aquí una pregunta que muchos artesanos, entre ellos nosotros mismos, nos inclinamos a contestar negativamente. La sola palabra política no es odiosa... no por lo que ella es en sí, sino por los fines a que se le encamina, por el grado de prostitución en que yace. Comprendemos lo que debiera ser esta gran palabra en que deben estar cifradas las aspiraciones santas y generosas de los verdaderos patriotas y republicanos, Pero, lo que es hoy día la

política, es solamente una fuente de malas inspiraciones, de rastreras y miserables pasiones. . . Lo que vemos es que los políticos del día, cual más, cual menos, persiguen un fin particular, un objeto de interés propio, sin curarse para nada de lo ajeno.

Y el pueblo –siempre el pobre pueblo– es el que lleva el gasto de la fiesta, para que goce el gran señor, para que tras el saludo y la sonrisa de hoy, se nos dé mañana un puntapié, una mirada de desprecio; para que suba a los puestos públicos el hijo de don fulano, el pariente de don sultano, no importa que sea una tunante. . . mientras numerosos jóvenes honrados y competentes vegetan muchas veces en la miseria y el aislamiento, porque no tienen empeños de ricos, recomendaciones de un señor, que es el único medio que hoy prevalece sobre todos. Oh, ¡por eso aborrecemos la política del día!”

(Angélica Illanes, "La revolución solidaria", 1990)

La situación, sin embargo no era fácil de solucionar, pues si bien los artesanos coincidían en "rechazar la política del día", marginarse de ella los dejaba a merced de los candidatos patronos. Por otra parte, las relativamente recientes experiencias revolucionarias de 1851 y 1859 demostraban los límites de la insurrección, "necesaria en circunstancias supremas", pero que "trastorna y desequilibra el edificio social antes que producir los beneficios de un nuevo orden de cosas". Así lo consideraba al menos don Lucrecio Arellano.

La tendencia fue entonces validar una cierta acción política, de tipo legal y reformista, que pronto empezaría a practicar el Partido Demócrata, fundado en 1887. Sin embargo, el problema aún persistiría al interior de la organización, cuya existencia misma se podía ver amenazada por el debate y la división política. Si a ello se sumaba que por estos mismos años la Iglesia Católica buscó ejercer alguna influencia sobre las sociedades obreras, el problema se hacía más complejo. Las sociedades mutuales privilegiarían entonces la protección de la organización social, rechazando que en sus recintos se debatiera de política y de religión, aunque aceptando que ello se hiciera fuera de la organización. Se trataba de una solución que Angélica Illanes ha calificado de "adentro y de afuera".

Adentro "estaba el cuerpo, sus necesidades físicas e intelectuales, la solidaridad y las aspiraciones de identidad y de futuro". Afuera "estaba el ideario demócrata, popular y constitucional, afuera estaba la causa santa: la concientización del pueblo" (Illanes, op. cit).

En los inicios del siglo, en la coyuntura de protestas obreras y populares de 1903-07, el tema volvió a emerger y esta vez primó la orientación anarquista que privilegió la acción de la organización social. El mancomunalismo nortino, sin embargo, hasta el año 1907 fue el que encontró una mejor salida: en la propia organización social podía haber la asistencia, la acción reivindicativa y la concientización política.

Como se sabe, este movimiento fue superado por la élite empresarial, política y militar que conjuró, por la vía de las armas, la huelga salitrera de 1907. Sin embargo, hacia 1920, la cuestión de la autonomía de las organizaciones sociales fue nuevamente planteada y se buscó resolver la tensión coordinando a través de Asambleas populares la relación entre partidos y organizaciones sociales. La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional de 1919 y la Constituyente de Obreros e Intelectuales de 1925 son buenos ejemplos de este tipo de solución.

Para no abundar demasiado en el recuento histórico, señalemos simplemente que la situación se modificó a partir de la década del treinta, haciéndose dominante el protagonismo partidario que operaba en una suerte de división del trabajo, al menos en el movimiento obrero: la base reivindicada, el partido vanguardista.

Esta tradición se vio nuevamente modificada en los años de dictadura, cuando la crisis del sistema político hizo posible en cierto grado que la iniciativa social y política retornara a las bases. Aquí emergió, como señalábamos al principio de esta ponencia, el debate sobre el significado de los movimientos sociales.

En torno a la eficacia de la acción política institucional

En la relación entre la izquierda y las organizaciones sociales no estaba comprometido sólo el pro-

blema de la autonomía de las organizaciones sociales, sino que de modo muy relevante la cuestión de la eficacia de la acción política militante. En efecto, en la primera década del siglo nuestros ácratas y libertarios debieron enfrentar el problema, admitiendo que no existía una sola respuesta.

Como saben los estudiosos del movimiento obrero, Alejandro Escobar, Magno Espinoza y Luis Olea, libertarios y amigos todos ellos y además dirigentes relevantes en las huelgas de Valparaíso de 1903 y de Iquique en 1907, percibieron que el socialismo científico, que habían conocido a través de José Ingenieros, "se diluía demasiado en el mar de la política, siendo necesario plantearlo en el terreno firme de la lucha económica y gremial". (Alejandro Escobar, *Memorias*).

El propio Recabarren, por su parte, que como se sabe, tomó distancia de los anarquistas, al fundar el Partido Obrero Socialista declaraba que la nueva agrupación se diferenciaría de los demócratas porque buscaría avanzar no sólo en la democracia política, sino también en la democracia económica y social.

Y todavía, en pleno proceso de institucionalización, en los años treinta, cuando se buscaba reunificar al sindicalismo, el tema volvería a emerger: la nueva Central Sindical, que había que fundar, ¿debía organizarse bajo el alero de la ley o con independencia de ella? Así de abierta y explícita fue la disyuntiva que se plantearon los dirigentes sindicales de todas las grandes centrales y federaciones que asistieron a la Convención Extraordinaria de Sindicatos, celebrada en febrero de 1935, luego de una significativa huelga de ferroviarios.

Los resultados de esta Convención fueron radicales. Se aconsejaba a sus participantes —los más relevantes del período: la Confederación Nacional del Sindicatos (socialista), la Federación Obrera de Chile (comunista) y la Confederación General del Trabajo (anarquista)— abandonar las personalidades jurídicas, ya que "resultaba muy difícil desenvolverse libremente estando sujetos al tutelaje del Estado y que los tribunales del trabajo tienden a favorecer a la parte patronal, con la ayuda de los representantes del gobierno".

En el Congreso constituyente de la CTCH el tema siguió siendo relevante, ya que se trataba de

hacer la unidad entre los sindicatos legales y el sindicalismo histórico, el *de facto*. En este evento primó un criterio de sentido común, expresado particularmente por los comunistas: había que hacer la unidad, porque a las masas obreras "había que tomarlas tales como son y no como nosotros quisiéramos que fueran". Por esta razón, señaló también Salvador Guevara, a nombre de la FOCH, aceptarían la legislación, pero no renunciarían a la lucha de clases.

El tema se puede rastrear históricamente y no es mi propósito abundar más en él. Sólo quiero señalar que el problema resurgió a principios de los sesenta, cuando Clotario Blest renunció a la presidencia de la CUT, y ciertamente con mayor fuerza y tensión en los años de la Unidad Popular, cuando se puso en discusión la viabilidad de la "via chilena al socialismo", dividiéndose la izquierda chilena cuando el golpe de Estado amenazaba gravemente el sistema político nacional.

AGITACION SOCIAL Y PROPUESTAS POLITICAS

Esquematizando de modo extremo, me parece que en la política popular y de izquierda en Chile han convivido dos grandes orientaciones en relación a la acción y las propuestas políticas. Por una parte, aquellas que han puesto el énfasis en la autonomía popular y en proposiciones de tipo corporativo o societario (desde la práctica de la organización social, es decir, desde el movimiento social se puede reorganizar la sociedad y el Estado); y, por otra parte, aquellas orientaciones que han subrayado la necesidad de participar del Estado para realizar desde allí la reforma del orden social (privilegio del partido y de una relación de negociación y/o de subordinación de la organización social).

No es mi propósito realizar una evaluación histórica de ambas orientaciones, por cuanto en términos extremos se pueden atribuir a ambas significativos aportes al movimiento social, como asimismo significativos fracasos. Valga sólo como ejemplo que el más significativo movimiento social popular que precedió a la Unidad Popular y

que hizo posible iniciar reformas económico-sociales sustantivas desde el Estado, culminó en una gran derrota histórica. Por otra parte, la negación de la acción política implícita en la posición "societaria" ha encontrado enormes dificultades para viabilizar sus proyectos de cambio, al no reconocer en la "democracia" —sin apellidos— y en el sistema político un espacio que acoja la diversidad de actores sociales y políticos que configuran a la sociedad.

Pareciera, en consecuencia, que insistir en la polaridad pudiera conducirnos a un callejón sin salida. Y que se debiera resolver las distancias entre la izquierda y los movimientos sociales por la vía de procesar políticamente la propia práctica del movimiento social. Es decir, que no se puede refundar una política popular si ésta no da cuenta sólo de las frustraciones y reivindicaciones populares, sino que, en forma mucho más relevante, de las capacidades de creación de sociedad que reiteradamente se manifiestan en la cultura popular chilena.

Adoptar este punto de vista conlleva necesariamente una crítica radical a las formas políticas que predominaron en la izquierda chilena en los años ochenta: no bastaba ver en los movimientos sociales renovación de la política o rabia acumulada que podía conducir a una salida insurreccional. Había prácticas sociales para ambas propuestas, pero

había una "otra práctica" que requería ser procesada y elaborada teórica y políticamente. Se trataba de aquella que debió permitir avanzar en una noción y en proposiciones en el ámbito de los derechos humanos, de comprender y fortalecer las diversas manifestaciones de la economía popular, de afianzar las experiencias culturales encaminadas a reforzar la identidad social popular, etc.

Se trataba, en suma, de una práctica que hacía posible refundar una política popular para la democracia, asentada en la experiencia de autonomía y de protagonismo histórico de los sectores populares en su lucha en contra del autoritarismo. La izquierda, sin embargo, presa de sus diferencias institucionales e insurreccionales, arribó a la democracia sin proyectos colectivos y debilitada en su identidad histórica. Ello ciertamente ha influido negativamente en los movimientos sociales, que carecieron de los apoyos políticos necesarios para proyectar sus prácticas y aprendizajes de los tiempos de la dictadura.

Estas debilidades de la izquierda han sido sin dudas relevantes, si se tiene en cuenta que, en nuestro país, la activación de los movimientos sociales se ha verificado no sólo a causa de nuestras recurrentes crisis económico-sociales, sino también porque en la sociedad se han hecho visibles proyectos colectivos de reforma social.